

# ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO

G/ADP/11

18 de diciembre de 2002

(02-6974)

---

## Comité de Prácticas Antidumping

### **INFORME DEL PRESIDENTE SOBRE LAS OPINIONES Y RECOMENDACIONES DEL COMITÉ DE CONFORMIDAD CON EL MANDATO ASIGNADO AL COMITÉ Y A SU GRUPO DE TRABAJO SOBRE LA APLICACIÓN EN LA DECISIÓN SOBRE LAS CUESTIONES Y PREOCUPACIONES RELATIVAS A LA APLICACIÓN ADOPTADA EL 14 DE NOVIEMBRE DE 2001 EN LA CONFERENCIA MINISTERIAL DE DOHA**

Señor Presidente: en mi calidad de Presidente del Comité de Prácticas Antidumping, bajo mi propia responsabilidad y sin perjuicio de la posición de los distintos Miembros, someto el presente informe a la consideración del Consejo General. El informe se presenta para dar cumplimiento a lo dispuesto en el párrafo 7.4 de la Decisión sobre las Cuestiones y Preocupaciones relativas a la Aplicación adoptada el 14 de noviembre de 2001 en la Conferencia Ministerial de Doha (la "Decisión Ministerial"), en el que, por acuerdo de los Ministros, "[s]e encomienda al Comité de Prácticas Antidumping que elabore directrices para mejorar los exámenes anuales y que en un plazo de 12 meses informe de sus opiniones y recomendaciones al Consejo General, para que a continuación éste adopte una decisión".

Asimismo, bajo mi propia responsabilidad y sin perjuicio de la posición de los distintos Miembros, aprovecho esta oportunidad para informar sobre las actividades del Comité y de su Grupo de Trabajo sobre la Aplicación de conformidad con los párrafos 7.2 y 7.3 de la Decisión Ministerial. Aunque en ninguno de esos párrafos se establece una obligación concreta con respecto a la presentación de informes, considero adecuado aprovechar esta oportunidad para informar a los Miembros sobre todas las iniciativas emprendidas por el Comité y por el Grupo de Trabajo de conformidad con la Decisión Ministerial.

En el párrafo 7.2 se establece que los Ministros reconocen que "si bien el artículo 15 del Acuerdo relativo a la Aplicación del Artículo VI del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 es una disposición obligatoria, convendría aclarar las modalidades para su aplicación. Por consiguiente, se encomienda al Comité de Prácticas Antidumping que, por conducto de su Grupo *ad hoc* sobre la Aplicación, examine esta cuestión y elabore las recomendaciones apropiadas, en un plazo de 12 meses, sobre la forma de dar carácter operativo a esa disposición". En el párrafo 7.3 se establece que los Ministros toman nota de que "el párrafo 8 del artículo 5 del Acuerdo relativo a la Aplicación del Artículo VI del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 no especifica el plazo que habrá de aplicarse para determinar el volumen de las importaciones objeto de dumping, y que el hecho de no especificarlo crea incertidumbres en la aplicación de la disposición. Se encomienda al Comité de Prácticas Antidumping que, por conducto de su Grupo *ad hoc* sobre la Aplicación, estudie esta cuestión y elabore recomendaciones en un plazo de 12 meses, con miras a garantizar la mayor previsibilidad y objetividad posibles en la aplicación de los plazos".

Desde que, en diciembre de 2001, se estableció un marco para el examen de las cuestiones encomendadas al Comité y su Grupo de Trabajo sobre la Aplicación, el Comité y el Grupo de Trabajo han analizado propuestas sobre cada uno de los tres temas de debate. El Comité y el Grupo de

Trabajo han celebrado una serie de reuniones informales, y yo he mantenido también consultas informales en numerosas ocasiones. Los Miembros han presentado documentos que contienen propuestas, explicaciones, preguntas y respuestas y proyectos de recomendación, y han participado activamente en los debates. Ese proceso ha permitido aclarar y delimitar las cuestiones. Adjunto al presente informe figura un resumen técnico en que se ofrece una visión general de los principales aspectos de las propuestas, las preguntas y respuestas y los debates de los Miembros.

Los debates han puesto de manifiesto que muchos Miembros reconocen la importancia de las cuestiones planteadas. Durante las deliberaciones, las delegaciones han expresado su entendimiento y, en algunos casos, su apoyo respecto de algunas de las propuestas o de elementos de las mismas. Además, tengo la impresión de que numerosas delegaciones, con independencia de su opinión sobre el fondo de las propuestas formuladas, han considerado útiles los debates para ampliar su comprensión de las propuestas y de las cuestiones técnicas pertinentes, así como de las opiniones de otros Miembros sobre tales propuestas. Todo ello se ve confirmado por el espíritu altamente constructivo con que los Miembros participan en el debate pormenorizado de esas cuestiones tan técnicas y complejas.

Como resultado del ánimo de cooperación mostrado por los Miembros a lo largo de los debates, me complace comunicar que el Comité ha adoptado dos recomendaciones sobre las cuestiones relativas a la aplicación cuyo estudio le encomendaron los Ministros.

En primer lugar, con respecto al mandato establecido en el párrafo 7.4 de la Decisión Ministerial, el Comité adoptó el 27 de noviembre una recomendación relativa a los exámenes anuales del Acuerdo Antidumping, que se ha distribuido a los Miembros en el documento G/ADP/9. Con objeto de proporcionar información útil a los Miembros y al público y de fomentar la transparencia, el Comité recomendó que en el informe anual se incluyese información adicional sobre el número de revocaciones antidumping notificadas por los Miembros, así como una comparación del número de medidas preliminares y definitivas notificadas por los Miembros en cada caso y en sus informes semianuales, y que los países desarrollados Miembros indicasen en sus informes semestrales la manera en que se hubiesen cumplido las obligaciones establecidas en el artículo 15, información que debería recopilarse e incluirse en un cuadro del informe anual del Comité, sin omitirse la mención de los casos en que los Miembros no hubiesen facilitado tal información. Creo que esa información adicional que se incluirá en los informes anuales del Comité contribuirá sin duda a mejorar esos informes y a fomentar la transparencia. Entiendo que el Presidente se propone someter esa recomendación a la consideración de los Miembros con miras a una decisión del Consejo General, cuya adopción considero muy necesaria.

En segundo lugar, con respecto al mandato establecido en el párrafo 7.3 de la Decisión Ministerial, el Comité adoptó el 27 de noviembre una recomendación sobre el período que ha de considerarse para formular una determinación de volúmenes insignificantes de importaciones a los efectos del párrafo 8 del artículo 5 del Acuerdo, distribuida a los Miembros en el documento G/ADP/10. Para facilitar orientación a ese respecto, el Comité recomendó que los Miembros determinasen el volumen de las importaciones objeto de dumping con referencia a uno de los tres plazos definidos, comunicasen al Comité la metodología elegida para su utilización en todas las investigaciones y, si en alguna investigación no se hubiese utilizado la metodología elegida, proporcionasen una explicación en el aviso o el informe separado públicos de esa investigación. Creo que esa recomendación, una vez puesta en práctica por los Miembros, asegurará la previsibilidad y objetividad en la aplicación de los plazos utilizados en las investigaciones antidumping para determinar la existencia de volúmenes insignificantes de importaciones a los efectos del párrafo 8 del artículo 5.

Sin embargo, dicho esto, tengo la impresión de que subsisten opiniones esencialmente discrepantes sobre la tercera cuestión relativa a la aplicación cuyo examen se ha encomendado al

Comité y a su Grupo de Trabajo, es decir, la forma de dar carácter operativo al artículo 15 del Acuerdo. A pesar de los numerosos debates celebrados y los intensos esfuerzos realizados por varios Miembros en las consultas, no puedo identificar una base significativa de consenso sobre una recomendación del Comité que dé cumplimiento al mandato en virtud del cual se han celebrado los debates. Aunque los debates han puesto de manifiesto la existencia de elementos de convergencia de los Miembros respecto de las propuestas formuladas, ello no ha bastado para suscitar un consenso acerca de una recomendación sobre tales elementos. Algunas delegaciones han opinado que los aspectos sobre los que existe un cierto grado de entendimiento común son insuficientes como materia sustantiva que justifique una recomendación. Otras delegaciones han expresado su decepción a ese respecto, ya que esperaban que el Comité estuviese en condiciones de formular algún tipo de recomendación sobre algunas cuestiones o sobre todas ellas. Sin embargo, está claro que las cuestiones planteadas en las propuestas, y desarrolladas y aclaradas mediante los debates, pueden constituir aún la base para nuevos debates si algún Miembro presenta propuestas relativas a esas cuestiones para su debate en un foro adecuado.

Habida cuenta de lo expuesto, considero que, en el contexto del mandato asignado por los Ministros al Comité y a su Grupo de Trabajo, el debate de esas cuestiones se ha proseguido hasta donde ha sido posible. Comprendo que los logros del Comité tal vez han sido menores de los inicialmente previstos por algunos Miembros. Sin embargo, para finalizar con tono optimista, deseo expresar mi satisfacción por las dos recomendaciones adoptadas y mi confianza en que esas recomendaciones mejorarán la calidad de los informes anuales del Comité y la previsibilidad y transparencia de las investigaciones antidumping. Además, estoy convencido de que el intercambio de ideas ha sido valioso en sí mismo, y la calidad del debate y de la información intercambiada por los Miembros confirma mi creencia de que hemos hecho buen uso del tiempo.

Deseo aprovechar esta oportunidad para agradecer a los Miembros del Comité su participación activa y su cooperación en el proceso, tanto entre ellos como conmigo como Presidente. Asimismo, deseo expresar mi agradecimiento a la anterior Vicepresidenta del Comité por la labor realizada en relación con estas cuestiones, así como a la Secretaría por el apoyo que me ha prestado en este proceso.

Por último, puesto que el Comité ha culminado su labor con arreglo al vigente mandato, desearía manifestar mi esperanza en que los Miembros consideren útil la información contenida en el informe técnico de los debates del Comité sobre las cuestiones que los Ministros encomendaron al Comité y a su Grupo de Trabajo sobre la Aplicación.

---

Cristian Espinosa Cañizares  
Presidente  
Comité de Prácticas Antidumping  
12 de diciembre de 2002

## Resumen técnico

### I. CUESTIONES DE PROCEDIMIENTO

1. El presente informe se somete a la consideración de los Miembros de conformidad con el párrafo 7.4 de la Decisión sobre las Cuestiones y Preocupaciones relativas a la Aplicación adoptada el 14 de noviembre de 2001 en la Conferencia Ministerial de Doha ("Decisión Ministerial"), en el que los Ministros acordaron lo siguiente:

"Se encomienda al Comité de Prácticas Antidumping que elabore directrices para mejorar los exámenes anuales y que en un plazo de 12 meses informe de sus opiniones y recomendaciones al Consejo General, para que a continuación éste adopte una decisión."

2. Asimismo, el presente informe trata sobre las actividades llevadas a cabo por el Comité y su Grupo de Trabajo sobre la Aplicación de conformidad con los párrafos 7.2 y 7.3 de la Decisión Ministerial. En ninguno de esos párrafos se establece una obligación específica en materia de presentación de informes. El presente informe constituye una oportunidad para poner en conocimiento de los Miembros todas las iniciativas emprendidas por el Comité y por su Grupo de Trabajo en cumplimiento de la Decisión Ministerial.

3. Según el párrafo 7.2 de la Decisión Ministerial, los Ministros reconocen

"que, si bien el artículo 15 del Acuerdo relativo a la Aplicación del Artículo VI del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 es una disposición obligatoria, convendría aclarar las modalidades para su aplicación. Por consiguiente, se encomienda al Comité de Prácticas Antidumping que, por conducto de su Grupo *ad hoc* sobre la Aplicación, examine esta cuestión y elabore las recomendaciones apropiadas, en un plazo de 12 meses, sobre la forma de dar carácter operativo a esa disposición."

En el párrafo 7.3 de la Decisión Ministerial se establece que los Ministros toman nota de que

"el párrafo 8 del artículo 5 del Acuerdo relativo a la Aplicación del Artículo VI del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 no especifica el plazo que habrá de aplicarse para determinar el volumen de las importaciones objeto de dumping, y que el hecho de no especificarlo crea incertidumbres en la aplicación de la disposición. Se encomienda al Comité de Prácticas Antidumping que, por conducto de su Grupo *ad hoc* sobre la Aplicación, estudie esta cuestión y elabore recomendaciones en un plazo de 12 meses, con miras a garantizar la mayor previsibilidad y objetividad posibles en la aplicación de los plazos."

4. En una reunión extraordinaria celebrada el 7 de diciembre de 2001, el Comité acordó que las cuestiones remitidas al Comité y su Grupo de Trabajo deberían examinarse sobre la base de comunicaciones escritas de los Miembros.<sup>1</sup> En esos documentos deberían abordarse los aspectos técnicos de las cuestiones, describirse las experiencias o preocupaciones de los Miembros al respecto y proponerse posibles resoluciones. El Comité acordó también que el Comité y el Grupo llevaran a cabo sus debates sustantivos en una serie de reuniones informales, convocando reuniones formales cuando fuese necesario, y que las comunicaciones escritas y las preguntas y respuestas relativas a esas comunicaciones se presentasen antes de las reuniones.

---

<sup>1</sup> Véase el documento G/ADP/M/20.

5. Los Miembros recordaron que en su última reunión ordinaria, el Grupo de Trabajo había solicitado que la Secretaría preparase un proyecto de recomendación sobre el período que ha de considerarse para formular una determinación de volúmenes insignificantes de importaciones a los efectos del párrafo 8 del artículo 5 para su examen en la siguiente reunión ordinaria del Grupo de Trabajo. Habida cuenta de que los Ministros habían remitido esa cuestión al Grupo de Trabajo, los Miembros acordaron que la Secretaría preparase tal proyecto de recomendación y lo distribuyese no más tarde del 25 de enero de 2002.<sup>2</sup>

6. Las primeras reuniones informales del Comité y de su Grupo de Trabajo se celebraron el 25 de marzo de 2002, y fueron seguidas de nuevas reuniones informales los días 23 a 25 de abril, 18 de junio, 20 de septiembre, 21 a 25 de octubre y 27 de noviembre, que se prosiguieron los días 9, y 11 y 12 de diciembre. Además, tras las reuniones informales celebradas en junio y octubre, ciertos Miembros participaron en consultas informales sobre las cuestiones pertinentes. Durante el mes de noviembre y hasta las reuniones informales del 12 de diciembre siguieron celebrándose intensas consultas entre determinados Miembros. Asimismo, en noviembre de 2002 se celebraron consultas informales abiertas a la participación general. El 27 de noviembre de 2002, el Comité y el Grupo de Trabajo sobre la Aplicación mantuvieron reuniones formales extraordinarias, que se reanudaron el 12 de diciembre de 2002.<sup>3</sup>

7. En las secciones siguientes se resumen los principales temas examinados en los debates. Para apreciar plenamente el alcance y la naturaleza de las cuestiones planteadas, el presente documento deberá leerse conjuntamente con los documentos intercambiados por los Miembros y las actas de las reuniones del Comité y del Grupo de Trabajo sobre tales cuestiones.

## **II. RESUMEN DE LOS PRINCIPALES TEMAS EXAMINADOS EN LAS PROPUESTAS, LAS PREGUNTAS Y RESPUESTAS Y LOS DEBATES DEL COMITÉ Y DE SU GRUPO DE TRABAJO**

### **A. DIRECTRICES PARA MEJORAR LOS EXÁMENES ANUALES CON ARREGLO AL PÁRRAFO 6 DEL ARTÍCULO 18 DEL ACUERDO (DOCUMENTO WT/MIN(01)/17, PÁRRAFO 7.4)**

8. En relación con este tema, el Canadá presentó el documento G/ADP/AHG/W/421, en el que propuso que el Comité de Prácticas Antidumping estudiase los objetivos de los informes y exámenes periódicos y determinase las estadísticas adecuadas para el logro de dichos objetivos, y a continuación pidiese a la Secretaría que recopilase las estadísticas pertinentes y presentase un informe al Comité. El Canadá propuso que, una vez examinadas y adoptadas por el Comité, esas estadísticas se difundiesen, con las aclaraciones que el Comité considerase convenientes, después de las reuniones ordinarias semestrales del Comité, con un nivel de detalles quizás más completo en el comunicado de otoño, cuyos datos se incluirían en el informe del Comité al Consejo del Comercio de Mercancías. El Canadá propuso la inclusión en tales informes de una serie de estadísticas que, a su juicio, proporcionarían un panorama general de las actividades antidumping en el período objeto de informe más reciente, además de información que permitiría al lector situar los datos en el contexto correspondiente. La propuesta del Canadá proporcionaría al Comité la oportunidad de añadir las acotaciones que estimase pertinentes, le permitiría identificar las situaciones anómalas e incluir las correspondientes explicaciones. El Canadá también señaló que el interés de la transparencia se vería aún más favorecido si se incluyese en el sitio Web de la OMC una base de datos que contuviese la

---

<sup>2</sup> Posteriormente distribuido como documento G/ADP/AHG/W/124, de fecha 18 de enero de 2002.

<sup>3</sup> El acta de la reunión formal extraordinaria del Comité se distribuirá como documento G/ADP/M/23, y los informes de la reunión formal extraordinaria del Grupo de Trabajo se distribuirán como documento G/ADP/AHG/R/13.

información recopilada a través de los informes semestrales de actividades antidumping presentados por los Miembros.

9. Indonesia presentó el documento G/ADP/W/422, en que expresó su acuerdo con la necesidad de que el Comité de Prácticas Antidumping mejorase los exámenes anuales, y solicitó también al Comité que fuese más receptivo respecto de las preocupaciones que los Miembros pudiesen plantear en las reuniones ordinarias celebradas a lo largo del año. En este aspecto, Indonesia recordó haber planteado preocupaciones que aún seguían sin respuesta, y afirmó que, dado que el mecanismo de solución de diferencias era un procedimiento prolongado y requería recursos financieros y humanos, era importante que el Comité respondiese de forma más activa a las preocupaciones de los Miembros.

10. En el documento G/ADP/W/423, las Comunidades Europeas formularon preguntas al Canadá y a Indonesia respecto de esas propuestas. Las CE preguntaron al Canadá acerca de los tipos de "acotaciones" que, en su opinión, el Comité podría añadir, y si la base de datos propuesta contendría únicamente los informes semestrales o también las decisiones de cada Miembro. El Canadá respondió, en el documento G/ADP/W/424, que no formulaba sugerencias concretas respecto de las acotaciones, sino que el Comité podría presentar las explicaciones adicionales que considerase adecuadas para aclarar la presentación de las estadísticas. Con respecto a la base de datos, el Canadá manifestó que su propuesta se limitaba a los datos contenidos en los informes semestrales.

11. En cuanto a la propuesta de Indonesia, las CE pidieron a Indonesia que aclarase cómo podría el Comité ser más receptivo respecto de las preocupaciones de los Miembros. Indonesia indicó, en el documento G/ADP/AHG/W/132, que el Comité parecía no ser capaz de responder con eficacia a las preocupaciones expresadas sobre los procedimientos antidumping en curso. Indonesia propuso que el Comité estableciese un procedimiento por el que un Miembro pudiese reunirse con las autoridades investigadoras competentes y con un funcionario de la Secretaría de la OMC, en tanto que tercero, para debatir un procedimiento concreto; y que la Secretaría de la OMC expusiese, por escrito u oralmente, su opinión sobre el caso. Indonesia señaló que esa opinión no sería vinculante y se formularía a efectos de aclaración y se utilizaría de forma constructiva, si el Miembro lo desease, en el procedimiento correspondiente en curso. Indonesia consideró que un mecanismo de esta naturaleza serviría, como mínimo, de instrumento de debate sobre los procedimientos en curso al nivel de la OMC.

12. En las deliberaciones de la reunión de marzo sobre esas propuestas y preguntas y respuestas, varios Miembros expresaron su apoyo a la propuesta del Canadá en el sentido general de añadir nuevas estadísticas al proceso de presentación de informes del Comité, pero se formularon preguntas sobre qué tipo de información estaba ya disponible y qué información de utilidad podría añadirse. Asimismo, se pidió a la Secretaría que preparase una nota informativa en la que se explicase de qué información estadística de ese tipo se disponía en ese momento y se abordasen las cuestiones técnicas y prácticas derivadas de la propuesta del Canadá.

13. La nota de la Secretaría, contenida en el documento G/ADP/W/425, se presentó en la reunión de abril. En ella se explicaba que la División de Normas de la Secretaría mantenía bases de datos con la información facilitada en los informes semestrales de actividades antidumping y medidas compensatorias presentados por los Miembros, que podía utilizarse para recopilar automáticamente información sobre las diversas categorías de información facilitada en los informes semestrales y para confeccionar cuadros, clasificándola en función de las fechas, los diferentes Miembros y otros diversos criterios. Además, en el sitio Web de la OMC podía consultarse la información anual sobre las iniciaciones de investigaciones y las medidas impuestas. La Secretaría informó de que las estadísticas sobre las actividades antidumping relativas a iniciaciones, medidas provisionales y definitivas y los compromisos relativos a los precios, así como las medidas en vigor, figuraban en el Informe anual de la OMC y en el informe anual del Comité al Consejo del Comercio de Mercancías. Además, en noviembre de 2001 la Secretaría instauró la práctica de publicar comunicados de prensa

semestrales con información sobre las actividades antidumping notificadas por los Miembros en sus informes semestrales más recientes, junto con cuadros estadísticos. En cuanto a las estadísticas respecto de las cuales se indicaba específicamente en la propuesta del Canadá que posiblemente convendría que fueran notificadas por el Comité, la Secretaría señaló que parte de esa información ya se había facilitado, como se indicó anteriormente. Por motivos que tenían que ver principalmente con la información presentada en los informes semestrales, cierta información no podía introducirse en la base de datos de la División de Normas con el fin de producir automáticamente un informe fiable sobre las medidas suprimidas durante un período determinado, y no se solicitaba la inclusión de determinada información de otro tipo en los informes semestrales. Por último, en la nota de la Secretaría se indicaba que, con el vigente presupuesto de funcionamiento de la Secretaría, era imposible hacer frente a los costos necesarios para dar acceso público a la base de datos antidumping a través del sitio Web de la OMC.

14. Con respecto a la propuesta de Indonesia, varios Miembros, entre ellos el Canadá, expresaron su preocupación por que la propuesta excediese del mandato ministerial y pusiese a la Secretaría en la difícil situación de tener que valorar las cuestiones sin poseer toda la información pertinente. Por otra parte, la propuesta de Indonesia no parecía afectar tanto al Comité como a la Secretaría, y varios Miembros se preguntaron si la función prevista para la Secretaría sería, en todo caso, la apropiada. En particular, algunos Miembros expresaron reservas respecto a la idea de solicitar incluso opiniones no vinculantes a la Secretaría en relación con materias que, en definitiva, podrían llegar a ser objeto de solución de diferencias.

15. En su respuesta al Canadá, Indonesia manifestó, en el documento G/ADP/W/136, que, como país en desarrollo con recursos financieros y humanos relativamente escasos, Indonesia trataba de optimizar el valor de la visita realizada a Ginebra para asistir al Comité de Prácticas Antidumping. La propuesta de ampliar las actividades del Comité fue realizada con este fin, e Indonesia consideraba que beneficiaría a todos los Miembros y reforzaría el papel del Comité.

16. Tras la reunión informal celebrada en abril de 2002 no hubo más debates sobre las propuestas canadiense o indonesia. Sin embargo, en la reunión celebrada en septiembre de 2002, los Miembros consideraron prematuro examinar un posible informe sobre los debates del Comité. En la reunión informal celebrada en octubre, los Estados Unidos presentaron una propuesta, contenida en el documento G/ADP/W/427<sup>4</sup>, con objeto de proporcionar información útil a los Miembros y al público y fomentar la transparencia con arreglo al Acuerdo relativo a la Aplicación del Artículo VI del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 (en adelante denominado "el Acuerdo"). Los Estados Unidos propusieron que el informe anual del Comité presentado con arreglo al párrafo 6 del artículo 18 incluyese una lista de las revocaciones antidumping notificadas por cada Miembro durante el período del informe, y que, en los casos en que un Miembro no hubiese suministrado ese tipo de información, el informe señalase esa omisión. En la propuesta estadounidense se señaló que ya se pedía a los Miembros que informasen acerca del número de medidas suprimidas en un anexo de sus informes semianuales de actividades antidumping. Los Estados Unidos propusieron también que el informe anual del Comité incluyese además un gráfico en el que se comparase respecto de cada Miembro el número de medidas preliminares y definitivas notificadas en sus informes semianuales con el número de avisos de medidas preliminares y definitivas que el Miembro hubiese presentado a la Secretaría durante el período comparable. En tercer lugar, los Estados Unidos propusieron que para cada investigación antidumping los Miembros de la OMC indicaran si se había celebrado o no una audiencia pública en la que las partes interesadas que apoyaban la solicitud y las partes interesadas que se oponían a ella habían tenido la oportunidad de presentar sus posiciones, o si todas las partes interesadas habían renunciado a su derecho a una

---

<sup>4</sup> Posteriormente distribuida de nuevo en forma de proyecto de recomendación con la signature G/ADP/W/429.

audiencia pública. Asimismo, los Estados Unidos propusieron que el informe anual del Comité indicase respecto de cada Miembro el número de investigaciones en que se hubieran realizado audiencias públicas en que las partes interesadas que apoyaran la solicitud, y las partes interesadas que se opusieran a ella, hubieran tenido la oportunidad de presentar su posición.

17. Varios Miembros expresaron su apoyo general a la propuesta estadounidense. Sin embargo, algunos Miembros formularon objeciones acerca del tercer aspecto de la propuesta, es decir, la notificación de posibles audiencias en que las partes interesadas, tanto favorables a la solicitud como contrarias a ella, hubiesen tenido ocasión de exponer sus opiniones. Esos Miembros indicaron que tales audiencias se celebraban rara vez, o nunca, con arreglo a sus procedimientos internos de investigación antidumping, y que notificar tal dato podría inducir a error. También se sugirió que un elemento adicional que podría incluirse en cualquier proyecto de recomendación consistía en que los países desarrollados informasen sobre la manera en que cumplían el artículo 15 del Acuerdo en cada investigación. Posteriormente, la India presentó, en el marco de las consultas informales, una propuesta escrita a ese respecto que dio origen a preguntas sobre la forma en que podría notificarse tal información, considerada por varios Miembros como no susceptible de resumen o cuantificación. Otros Miembros sugirieron que podría bastar una descripción explicativa, o que los Miembros podrían adoptar una serie de códigos para tratar la cuestión. Durante las consultas, los Miembros siguieron examinando el proyecto de recomendación presentado por los Estados Unidos, junto con la propuesta de que se notificase información adicional. El 19 de noviembre, el Presidente presentó un proyecto de texto para su consideración por los Miembros, y un segundo proyecto de texto para su examen en la reunión especial del 27 de noviembre. Tras examinar de nuevo los proyectos de texto, tanto en las consultas como en la reunión especial del 27 de noviembre, se adoptó una recomendación, distribuida posteriormente como documento G/ADP/9. En el momento de su adopción, el Presidente observó que Bulgaria opinaba que las obligaciones establecidas en esa recomendación en virtud del artículo 15 no eran aplicables a Bulgaria. El Presidente observó también que esa afirmación era únicamente una apreciación de Bulgaria, y no prejuzgaba en modo alguno los derechos y obligaciones de los Miembros. Bulgaria confirmó esas observaciones.

**B. RECOMENDACIÓN SOBRE EL PERÍODO QUE HA DE CONSIDERARSE PARA FORMULAR UNA DETERMINACIÓN DE VOLÚMENES INSIGNIFICANTES DE IMPORTACIONES A LOS EFECTOS DEL PÁRRAFO 8 DEL ARTÍCULO 5 DEL ACUERDO (WT/MIN(01)/17, PÁRRAFO 7.3)**

18. El Canadá presentó una propuesta a ese respecto en el documento G/ADP/AHG/W/125 en la que recomendó que el plazo que habría de aplicarse para determinar el volumen de las importaciones con relación a la evaluación de la autoridad investigadora para establecer si el volumen de las importaciones objeto de dumping era insignificante a los efectos del párrafo 8 del artículo 5 del Acuerdo, debería ser igual al período de recopilación de datos para la investigación antidumping, que, normalmente, debería ser de 12 meses, y en ningún caso de menos de seis, y terminar en la fecha más cercana posible a la fecha de iniciación de la investigación.

19. Indonesia, en una propuesta formulada en el documento G/ADP/AHG/W/126, manifestó que la norma establecida en el párrafo 8 del artículo 5 debería aplicarse una vez iniciado el procedimiento. Indonesia propuso que el período de investigación fuese la referencia general para la aplicación de la norma mencionada, y que ésta se aplicase tan pronto como pudiesen establecerse de manera fiable los volúmenes de las importaciones. Indonesia propuso que, dado que el período de investigación se conocía antes de iniciar un procedimiento, y siempre que se dispusiese de las cifras de importación (sin necesidad de nuevas verificaciones) para evaluar los requisitos *de minimis*, las prescripciones del párrafo 8 del artículo 5 se aplicasen antes de la iniciación. En el documento G/ADP/AHG/W/130, el Canadá pidió a Indonesia que aclarase si su propuesta se refería al período de investigación del dumping o al período de investigación del daño. Indonesia expuso, en el documento G/ADP/AHG/W/132, su opinión de que, al establecer una relación causal entre el dumping y el daño,



el plazo pertinente era el período de investigación del dumping, y aclaró que, a su entender, era ese período el que debería utilizarse para establecer si las importaciones eran insignificantes o no.

20. El Brasil, en una propuesta establecida en el documento G/ADP/AHG/W/127, expuso la opinión de que si el volumen de las importaciones procedentes de un país fuese insignificante, esas importaciones no podrían acumularse a las importaciones de otras procedencias, y debería ponerse inmediatamente fin a la investigación en relación con los productos de ese origen. El Brasil propuso que la parte proporcional de las importaciones de cada país objeto de investigación debería calcularse sobre la base del período de investigación de la existencia de dumping.

21. Habida cuenta de los debates celebrados en relación con este tema en las reuniones ordinarias del Grupo de Trabajo sobre la Aplicación, y a petición de los Miembros, la Secretaría preparó un proyecto de recomendación sobre el período que ha de considerarse para formular una determinación de volúmenes insignificantes de importaciones a los efectos del párrafo 8 del artículo 5 del Acuerdo. En ese texto, distribuido con la signatura G/ADP/AHG/W/124, se formula un proyecto de recomendación según el cual, con respecto a las investigaciones iniciales para determinar la existencia de dumping y del consiguiente daño, normalmente se determinará si el volumen de las importaciones reales objeto de dumping procedentes de un determinado país es insignificante tomando como referencia el volumen de las importaciones procedentes de ese país durante los 12 meses consecutivos más recientes anteriores a la iniciación sobre los cuales se disponga de datos.

22. Los debates de las reuniones de marzo, abril, junio y septiembre de 2002 se centraron principalmente en el proyecto de texto preparado por la Secretaría, que se revisó varias veces durante ese período en función de los comentarios y sugerencias de los Miembros, según se refleja en los documentos G/ADP/AHG/W/124/Rev.1 a Rev.4. En lo que respecta al período adecuado, se propusieron e incluyeron en el proyecto de texto varias opciones, basadas en la opinión expresada por algunos Miembros de que la recomendación no debería dar a entender que la práctica nacional existente al respecto no era adecuada. Asimismo, los Miembros discreparon sobre si el proyecto de texto debía utilizar el auxiliar "deberán" ("should") más el infinitivo del verbo principal o el futuro simple del verbo principal ("shall") para establecer el modo concreto de actuación de los Miembros. Varios Miembros expresaron su preocupación en la reunión de septiembre, y nuevamente en octubre, porque el proyecto de recomendación parecía reflejar opiniones cada vez más divergentes, habida cuenta de las múltiples opciones y posibilidades incluidas en su texto y, por lo tanto, no introducía transparencia y previsibilidad en la práctica de los Miembros.

23. En el documento G/ADP/AHG/W/140 y Corr.1, Tailandia comentó, en relación con el proyecto de texto, que, aun cuando el volumen de las importaciones fuese efectivamente insignificante durante el período correspondiente, la autoridad investigadora podría negarse a tomar en cuenta ese hecho e insistir en que había "posibilidades" de que en un futuro cercano el volumen de las importaciones excediese del nivel en que ese volumen se consideraba insignificante. En consecuencia, Tailandia propuso que el proyecto se modificase para sustituir la expresión "reales o potenciales" por las palabras "reales o inminentes". Al igual que otros varios Miembros, Tailandia opinó que sería más apropiado utilizar el futuro simple del verbo principal ("shall") en lugar del auxiliar "deberán" ("should") más el infinitivo del verbo principal, a fin asegurar la claridad y la transparencia, de conformidad con el preámbulo del proyecto.

24. Turquía se refirió, en el documento G/ADP/AHG/W/141, a las tres posibilidades establecidas en el proyecto de texto en relación con el período de tiempo que ha de considerarse para formular una determinación de volúmenes insignificantes de importaciones. En opinión de Turquía, existían motivos de preocupación respecto de cada posibilidad. Además, Turquía consideró importante establecer un período definido para formular una determinación de volúmenes insignificantes de importaciones que asegurase la previsibilidad del ejercicio y, en consecuencia, propuso que en la recomendación se especificase un período. Habida cuenta de esas preocupaciones, Turquía propuso

que se determinase si el volumen de las importaciones objeto de dumping procedentes de un determinado país se consideraba insignificante tomando como referencia el volumen de las importaciones procedentes de ese país durante los 12 meses consecutivos más recientes anteriores a la iniciación sobre los cuales se dispusiese de datos. Asimismo, Turquía propuso que los Miembros a los que su legislación nacional no permitiese utilizar ese período podrían utilizar los 12 meses consecutivos más recientes anteriores a la fecha en que se hubiese presentado la solicitud y sobre los cuales se dispusiese de datos, siempre que la solicitud fuese pública, y que esos Miembros notificarían al Comité las limitaciones existentes en su legislación. En opinión de Turquía, definir con precisión el período que hubiese de considerarse para determinar el volumen insignificante de las importaciones contribuiría a la transparencia, la previsibilidad y la coherencia de la ejecución sin menoscabar los derechos de las autoridades investigadoras derivados del Acuerdo Antidumping.

25. Durante la reunión de octubre de 2002, Noruega sometió a la consideración del Grupo un proyecto de recomendación contenido en el documento G/ADP/AHG/W/144. El Brasil presentó también, en el documento G/ADP/AHG/W/145, un nuevo proyecto de recomendación para su examen por el Grupo. Cada uno de esos proyectos de recomendación tenía como objetivo acercar las posiciones discrepantes surgidas en el curso de los debates de las reuniones informales y reflejadas en las versiones revisadas del proyecto de texto de la Secretaría. El Presidente distribuyó un proyecto de texto el 19 de noviembre. Tras nuevas deliberaciones, mantenidas tanto en las consultas como en la reunión especial del 27 de noviembre, se adoptó una recomendación, distribuida posteriormente como documento G/ADP/10.

C. MODALIDADES PARA LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 15 DEL ACUERDO Y RECOMENDACIONES SOBRE LA FORMA DE DAR CARÁCTER OPERATIVO A ESA DISPOSICIÓN (WT/MIN(01)/17, PÁRRAFO 7.2)

26. Inicialmente, Indonesia, el Brasil y la India formularon propuestas sobre este tema.

27. Indonesia propuso, en el documento G/ADP/AHG/W/126, que se diese carácter operativo al artículo 15 garantizando la aplicación de soluciones constructivas de manera obligatoria a todos los países en desarrollo, y señaló que ello requeriría modificar los términos imprecisos del Acuerdo. Indonesia consideró que las soluciones más evidentes eran los compromisos relativos a los precios y el principio del derecho inferior, y que deberían convertirse en disposiciones obligatorias. Sin embargo, dado que esas soluciones estaban al alcance de todos los Miembros, Indonesia opinó que debería reflexionarse más a fondo acerca de otras soluciones constructivas relacionadas con los intereses fundamentales de los países en desarrollo. A este respecto, Indonesia propuso que cuando las importaciones de los países en desarrollo hubiesen descendido en términos relativos y absolutos en el lapso de los 12 meses siguiente al período de investigación, no deberían imponerse medidas contra los países interesados, porque en esas circunstancias el propio proceso de iniciación habría repercutido ya en los intereses fundamentales de los países en desarrollo afectados.

28. Las Comunidades Europeas formularon, en el documento G/ADP/AHG/W/129, preguntas relativas a las propuestas de Indonesia. En particular, las CE señalaron que, después de haberse iniciado una investigación antidumping, las importaciones podían descender por varias razones, por ejemplo, como simple reacción a la iniciación de una investigación antidumping o porque se hubiesen abandonado las prácticas antidumping de manera duradera, y preguntaron a Indonesia si podía especificar si se debería distinguir entre estos dos supuestos, y en caso afirmativo, de qué manera. Las CE preguntaron también cómo preveía Indonesia la aplicación práctica de su propuesta, puesto que los datos relativos a las importaciones en el lapso de los 12 meses siguiente al período de investigación sólo estarían disponibles con cierto retraso, y si las autoridades investigadoras deberían abrir de oficio una nueva investigación después de haber concluido el período de investigación, a fin de comprobar si las importaciones habían descendido.

29. En el documento G/ADP/AHG/W/134, Indonesia respondió a las preguntas de las Comunidades Europeas, y afirmó que no era necesario analizar las posibles situaciones que originaban un descenso de las importaciones en términos relativos y absolutos, puesto que lo realmente importante era el efecto de ese descenso sobre los intereses esenciales de los países en desarrollo afectados. Con respecto a la aplicación práctica de su propuesta, Indonesia respondió que, aunque el hecho de no disponer de datos podía plantear un problema en determinados casos, la mayor parte de los procedimientos duraban, al menos, un año antes de que se llegase a una determinación definitiva, y que el período de investigación generalmente comenzaba dos o tres meses antes de la iniciación del procedimiento. Este lapso de tiempo debería ser suficiente para determinar si las importaciones habían descendido en términos relativos y absolutos, y la decisión de imponer medidas a los países en desarrollo podría adoptarse en el momento de la determinación definitiva. En caso de que ese plazo no fuera suficiente, Indonesia señaló que podría considerarse la posibilidad de utilizar los datos estimados para un período de 12 meses basándose en los datos reales correspondientes a seis meses. Indonesia consideró que los niveles de importación después del período de investigación podrían determinarse en el curso del procedimiento basándose en estadísticas actualizadas de importación de los servicios aduaneros y en la producción y las ventas nacionales. En caso necesario, la información adicional podría incluir también estadísticas de exportación oficiales del país afectado e información complementaria obtenida de las partes interesadas. Aunque señaló que la información adicional necesaria no imponía a las autoridades investigadoras la carga de realizar una nueva investigación, Indonesia reconoció, no obstante, que los procedimientos relativos a mercancías correspondientes a clasificaciones mixtas podían plantear de hecho problemas que sería necesario examinar.

30. En el documento G/ADP/AHG/W/130, el Canadá planteó preguntas acerca de la propuesta de Indonesia. En particular, el Canadá preguntó cómo tenía previsto Indonesia dar carácter operativo a su propuesta relativa al derecho inferior obligatorio y los compromisos, si serían obligatorios tanto un compromiso como un derecho inferior en todos los casos en que se tratara de importaciones de países en desarrollo Miembros y, en caso afirmativo, cómo preveía Indonesia que aplicasen esa medida las autoridades investigadoras.

31. Indonesia respondió a las preguntas del Canadá en el documento G/ADP/AHG/W/132 y afirmó que el principio del derecho inferior y los compromisos deberían ser obligatorios siempre que se impusiesen medidas contra un país en desarrollo Miembro. Indonesia sugirió que esa obligatoriedad podría llevarse a la práctica si las autoridades investigadoras establecían un compromiso al nivel del derecho inferior calculado para las empresas que cooperasen en un compromiso relativo a los precios. En el caso de aquellas empresas que prefiriesen una medida antidumping distinta de un compromiso relativo a los precios, las medidas en cuestión deberían establecerse al tipo del derecho inferior. Para las medidas a escala de todo un país, Indonesia opinó que las autoridades investigadoras deberían poder imponer las medidas que considerasen más adecuadas en vista de la cooperación obtenida. Asimismo, Indonesia afirmó que si el principio del derecho inferior fuese obligatorio, ya no sería una solución constructiva en beneficio de los países en desarrollo, puesto que todos los Miembros podrían acogerse a ella.

32. En relación con las propuestas de Indonesia, los Estados Unidos preguntaron, en el documento G/ADP/AHG/W/131, en qué medida requerirían esas propuestas una modificación del Acuerdo Antidumping.

33. En el documento G/ADP/AHG/W/132, Indonesia respondió a la pregunta de los Estados Unidos afirmando que sus propuestas requerirían una modificación del artículo 15 del Acuerdo Antidumping que garantizase la definición de las soluciones constructivas y su carácter obligatorio. Indonesia manifestó que concedía particular importancia a la tercera solución, es decir, la no imposición de medidas cuando las importaciones hubiesen descendido en términos relativos y absolutos en el lapso de los 12 meses siguientes al período de investigación. Indonesia propuso

también que las medidas antidumping solamente se aplicasen a los países en desarrollo por un período máximo de cinco años.

34. El Brasil estableció sus opiniones y propuestas en el documento G/ADP/AHG/W/127. El Brasil propuso que, con el fin de dar carácter operativo al artículo 15, podría desarrollarse la idea de las "soluciones constructivas", con respecto tanto al procedimiento para ofrecer la solución, como a su contenido. En cuanto al procedimiento, la obligación de explorar soluciones constructivas debería suponer que las autoridades del país desarrollado tomaran la iniciativa de buscar una solución diferente de la imposición de un derecho antidumping y participasen efectivamente en el proceso. Por ejemplo, el Brasil propuso que las autoridades del país desarrollado sugiriesen a los exportadores interesados en el proceso la posibilidad de los compromisos relativos a los precios, participasen activamente en el proceso de deliberación sobre el compromiso y, si lo solicitasen los exportadores, ayudasen a formularlo. El Brasil consideró también importante definir un marco temporal para que las autoridades del país desarrollado tomaran la iniciativa de sugerir el compromiso relativo a los precios, y propuso que las autoridades investigadoras adoptasen la iniciativa de explorar tales medidas constructivas antes de la imposición de los derechos preliminares, dado que tal medida tenía una repercusión negativa sobre las exportaciones del producto en cuestión. Como ejemplo concreto de "solución constructiva" que acordarían los Miembros, el Brasil propuso que se estableciesen parámetros para el nivel del compromiso relativo a los precios, e indicó que se podrían prever dos situaciones: a) que el margen de subvaloración de los precios fuese inferior al margen de dumping; y b) que el margen de dumping fuese inferior a la subvaloración de precios. El Brasil propuso que, en el primer caso, el compromiso relativo a los precios se guiase por el precio necesario para eliminar el daño, mientras que en el segundo, el incremento de los precios resultante del compromiso debería ser el necesario para eliminar el dumping. El Brasil se refirió a esa solución como a un compromiso relativo al "precio inferior", similar al concepto del "derecho inferior". Según el Brasil, en el caso de los Miembros que no utilizasen la norma del "derecho inferior", se podría considerar que se trataba de una medida constructiva que podrían explorar las autoridades.

35. En el documento G/ADP/AHG/W/129, las Comunidades Europeas plantearon preguntas relativas a la propuesta del Brasil. En concreto, pidieron al Brasil que aclarase si, en su opinión, una norma del "derecho inferior" que aplicase con carácter general un país desarrollado Miembro no se consideraría una "solución constructiva" en el sentido de la segunda frase del artículo 15, que explicase por qué se remitía al margen de subvaloración de los precios como base del compromiso relativo al "precio inferior", y que indicase si tenía en cuenta que había también otras posibilidades además de la subvaloración para establecer el nivel no perjudicial de los precios a los efectos de un compromiso.

36. En respuesta a las preguntas de las Comunidades Europeas, el Brasil aclaró, en el documento G/ADP/AHG/W/133, que consideraba que la obligación de los países desarrollados Miembros de explorar medidas constructivas se relacionaba con el principio del trato especial y diferenciado para los países en desarrollo Miembros. El Brasil manifestó que, en ese sentido, la aplicación de la norma del "derecho inferior" por los países desarrollados en todas las investigaciones antidumping (en relación con las importaciones procedentes de países desarrollados y de países en desarrollo), aunque constituyese una solución constructiva, no podía considerarse un procedimiento que hiciese realidad el principio de trato especial y diferenciado consagrado en el artículo 15. Por esa razón, el Brasil indicó que en el caso de los países desarrollados que no utilizasen la norma del "derecho inferior", la aplicación selectiva del derecho inferior a los países en desarrollo Miembros podía considerarse una medida constructiva que era preciso explorar en el contexto del artículo 15. El Brasil aclaró también que el motivo por el que se remitía al margen de subvaloración de los precios como base del compromiso relativo al "precio inferior" era que, en caso de que fuese inferior al margen de dumping, sería perfectamente suficiente para eliminar el daño, conforme a lo indicado en el párrafo 1 del artículo 9 del Acuerdo.

37. El Canadá planteó una pregunta relativa a la propuesta del Brasil en el documento G/ADP/AHG/W/130. En concreto, el Canadá preguntó, con respecto a los compromisos relativos a los precios, cómo se conciliaría la propuesta del Brasil de que las autoridades investigadoras adoptasen la iniciativa de explorar medidas constructivas antes de la imposición de los derechos preliminares con el párrafo 2 del artículo 8 del Acuerdo, según el cual "[n]o se recabarán ni se aceptarán de los exportadores compromisos en materia de precios excepto en el caso de que las autoridades del Miembro importador hayan formulado una determinación preliminar positiva de la existencia de dumping y de daño causado por ese dumping".

38. En respuesta a la pregunta del Canadá, el Brasil indicó, en el documento G/ADP/AHG/W/133, que su propuesta consistía en que las autoridades investigadoras adoptasen la iniciativa de explorar medidas constructivas antes de la aplicación de derechos preliminares, pero después de que se hubiese formulado una determinación preliminar, de conformidad con la disposición pertinente del Acuerdo.

39. Los Estados Unidos plantearon, en el documento G/ADP/AHG/W/131, preguntas relativas a la propuesta del Brasil. Concretamente, los Estados Unidos preguntaron si el Brasil coincidía con la interpretación de la India en lo referente a la relación entre las dos frases del artículo 15, a saber que, "la segunda frase del artículo 15, leída en el contexto de la primera frase, sugiere una posible forma de que los países desarrollados Miembros, cuando contemplen la aplicación de medidas antidumping, puedan tener 'particularmente en cuenta' a los países en desarrollo Miembros", y si hacía suya la sugerencia de la India de que "para examinar si la imposición de derechos antidumping afectaría a los intereses fundamentales de los países en desarrollo se necesita efectuar una investigación de carácter específicamente económico". En caso afirmativo, los Estados Unidos deseaban saber qué medidas y criterios de evaluación de la repercusión económica propondría utilizar el Brasil a esos efectos. Si la respuesta era negativa, los Estados Unidos preguntaban cuál era, a juicio del Brasil, el significado de la expresión "cuando dichos derechos puedan afectar a los intereses fundamentales de los países en desarrollo Miembros" contenida en la segunda frase del artículo 15. Los Estados Unidos pidieron al Brasil que explicase cómo la propuesta de que las autoridades investigadoras adoptasen la iniciativa de explorar los compromisos relativos a los precios podría hacerse compatible con el párrafo 2 del artículo 8 del Acuerdo Antidumping, que dispone que "[n]o se recabarán ni se aceptarán de los exportadores compromisos en materia de precios excepto en el caso de que las autoridades del Miembro importador hayan formulado una determinación preliminar positiva de la existencia de dumping y de daño causado por ese dumping". Los Estados Unidos preguntaron también en qué medida requerirían las propuestas del Brasil una modificación del Acuerdo Antidumping.

40. En el documento G/ADP/AHG/W/133, el Brasil indicó, en respuesta a las preguntas de los Estados Unidos, que la primera y segunda frases del artículo 15 establecían obligaciones claras para los países desarrollados (tener particularmente en cuenta la situación de los países en desarrollo y explorar soluciones constructivas), y que el cumplimiento de la segunda obligación no suponía necesariamente que se hubiese cumplido con la primera. El Brasil afirmó también que tanto los países desarrollados como los países en desarrollo Miembros se beneficiarían considerablemente de que se siguiera examinando la viabilidad técnica y, en el foro apropiado, la conveniencia política de establecer criterios específicos para evaluar si un derecho antidumping determinado podía afectar a los "intereses fundamentales" de los países en desarrollo Miembros. Al igual que en la respuesta a la pregunta del Canadá, el Brasil aclaró que su propuesta era que las autoridades investigadoras adoptasen la iniciativa de explorar medidas constructivas antes de la aplicación de derechos preliminares, pero después de que se hubiese formulado una determinación preliminar, de conformidad con la disposición pertinente del Acuerdo. Por último, el Brasil consideró que su propuesta no requería una modificación del Acuerdo, y que respondía únicamente a la finalidad de aclarar el significado del artículo 15 y en ella se sugería la forma de dar carácter operativo a sus disposiciones.

41. La India expuso sus opiniones y propuestas en el documento G/ADP/AHG/W/128. Según la India, para hacer operativo el artículo 15 podría darse un trato especial y diferenciado a las

importaciones procedentes de países en desarrollo cuando se contemplase la aplicación de medidas antidumping mediante a) la aceptación de compromisos en materia de precios ofrecidos por exportadores de países en desarrollo; b) la aplicación de la norma del derecho inferior; y c) la elevación de los márgenes *de minimis* y el aumento de los volúmenes insignificantes. Al exponer con más detalle su propuesta respecto a la aceptación de compromisos en materia de precios ofrecidos por exportadores de países en desarrollo, la India propuso que, durante la investigación antidumping, las autoridades investigadoras de los países desarrollados considerasen favorablemente aceptar los compromisos en materia de precios ofrecidos por exportadores de países en desarrollo, y que la aceptación de los compromisos en materia de precios ofrecidos por exportadores de países en desarrollo se convirtiese en la norma, en vez de seguir siendo la excepción. Además, los aumentos de precios deberían ser inferiores al margen de dumping si así bastasen para eliminar el daño a la rama de producción nacional. La India propuso también que se exigiese a las autoridades investigadoras de los países desarrollados que expusiesen detalladamente sus motivos cuando, aduciendo inviabilidad o cualquier otra consideración, no aceptasen compromisos ofrecidos por exportadores de países en desarrollo. Analizando más detenidamente su propuesta sobre la aplicación de la norma del derecho inferior, la India propuso que la norma del derecho inferior se siguiese obligatoriamente respecto de las importaciones procedentes de países en desarrollo. Asimismo, al exponer con más detalle su propuesta sobre los márgenes *de minimis* y el aumento de los volúmenes insignificantes, la India propuso que el margen de dumping *de minimis* del 2 por ciento se elevase al 5 por ciento para las exportaciones de países en desarrollo, y que el volumen insignificante por debajo del cual no se aplicarían medidas antidumping a las importaciones procedentes de países en desarrollo se aumentase del 3 al 7 por ciento para cada uno de esos países, sin exigir la acumulación. Subsidiariamente, la India propuso que las importaciones procedentes de países en desarrollo que representasen, como máximo, determinado porcentaje del consumo nacional del producto similar en el país desarrollado Miembro importador tuviesen el efecto de que el daño se considerase insignificante y no se aplicasen medidas antidumping. A ese respecto, la India señaló que, si bien determinados países desarrollados Miembros habían indicado que el nivel de las importaciones que constituía un daño insignificante, expresado como porcentaje del consumo total, era del 1 por ciento, se podría obtener el porcentaje específico correspondiente a las importaciones tras celebrar nuevos debates con el resto de los países Miembros. La India propuso también que se supervisase el cumplimiento del artículo 15 y, a ese respecto, que el aviso público que había de darse de conformidad con los párrafos 2.1, 2.2 y 2.3 del artículo 12 informase con suficiente detalle de la manera en que se hubiesen cumplido las obligaciones dimanantes del artículo 15. En caso de que se ofrecieran compromisos y de que la autoridad investigadora no los aceptara, el aviso público debería exponer los motivos del rechazo. Además, la India propuso que, para asegurar el cumplimiento de las obligaciones dimanantes del artículo 15 del Acuerdo, en el modelo uniforme del informe semestral se incluyese una columna en la que los Miembros indicasen claramente cómo habían tenido particularmente en cuenta la especial situación de los países en desarrollo Miembros y qué soluciones constructivas se habían explorado, tal como exigía el artículo 15.

42. Las Comunidades Europeas formularon, en el documento G/ADP/AHG/W/129, preguntas relativas a la propuesta de la India. En concreto, las CE preguntaron si la India sugería que la primera frase del artículo 15 del Acuerdo imponía a los países desarrollados Miembros una obligación distinta de la establecida en la segunda frase del mismo artículo y, en caso afirmativo, qué añadiría en la práctica esa obligación a la obligación enunciada en la segunda frase. Las CE tomaron nota de la indicación de la India de que se podía presumir que la aplicación de un derecho antidumping a exportadores de un país en desarrollo afectaba desfavorablemente a los intereses fundamentales de ese país en desarrollo, y pidieron a la India que explicase con más detalle si consideraba que los intereses fundamentales de un país en desarrollo resultaban siempre afectados cuando se imponían medidas antidumping a importaciones de ese país y, en caso afirmativo, por qué, y que aclarase si la presunción que había de establecerse con arreglo a su propuesta se podría refutar y, en caso afirmativo, sobre qué base. Con respecto a la propuesta de aumentar el volumen de importaciones insignificante, las CE pidieron a la India que precisase más el sentido de la expresión "sin exigir la

acumulación" y explicase por qué el volumen de las importaciones tendría repercusiones diferentes con respecto al daño sufrido por la rama de producción nacional en función de que el exportador se encontrara en un país en desarrollo o en un país desarrollado. Las CE preguntaron también si, en opinión de la India, su propuesta sobre el margen *de minimis* y el volumen de importaciones insignificante podría aplicarse sin modificar el Acuerdo.

43. En el documento G/ADP/AHG/W/135, la India respondió a las preguntas de las Comunidades Europeas afirmando que, en su opinión, la diferencia entre la redacción de las oraciones primera y segunda del artículo 15 era crucial. La India consideró que la expresión "contemplen la aplicación de medidas antidumping" de la primera oración debía interpretarse en el sentido de que incluyese el proceso de investigación. Cualquier otra interpretación implicaría que los redactores del Acuerdo no habían tenido en cuenta la especial situación de los países en desarrollo Miembros en relación con el proceso de investigación, pese a que en el párrafo 13 del artículo 6 del Acuerdo se mostraba una preocupación especial por los problemas de las pequeñas empresas, incluidas las de los países desarrollados Miembros. La India manifestó que esa interpretación era apoyada por la Decisión de 5 de mayo de 1980 del Comité de Prácticas Antidumping (Ronda de Tokio), que había interpretado las obligaciones de los países desarrollados Miembros con arreglo a la primera oración del artículo 13 del Código Antidumping de 1979, cuya redacción era idéntica a la del artículo 15 del Acuerdo. Según la India, el Comité de la Ronda de Tokio interpretó el artículo 15 en el sentido de que permitía modificar las disposiciones relativas a la determinación de la existencia de dumping con arreglo al Código de 1979. Para la India era evidente que la primera oración del artículo 15 imponía a los países desarrollados Miembros la obligación de tener particularmente en cuenta la especial situación de los países en desarrollo durante toda la investigación antidumping, desde el inicio de una investigación y durante la imposición de derechos antidumping y el proceso de examen, de haberlo. En la segunda oración del artículo 15 se concretaba el carácter de la obligación impuesta en virtud de la primera oración en la etapa específica de la imposición de derechos, recayendo en los países desarrollados la obligación positiva de explorar todas las soluciones constructivas antes de imponer efectivamente derechos antidumping. La India sugirió que la primera oración del artículo 15 podía ponerse en práctica durante el proceso de investigación, al proponer que los países desarrollados Miembros, en lugar de recurrir a los "hechos disponibles" y dejar de lado toda la respuesta al cuestionario, trataran de llenar las lagunas en las respuestas al cuestionario de los exportadores de los países en desarrollo formulando preguntas específicas y dando a esos exportadores tiempo adicional para responder; y, en todos los casos en que el exportador de un país en desarrollo hubiese procurado cooperar respondiendo al cuestionario, recurriesen a los hechos de que se tuviese conocimiento con arreglo al párrafo 8 del artículo 6 de la manera más favorable al exportador del país en desarrollo, en lugar de la más adversa, según se sugería en el párrafo 7 del Anexo II del Acuerdo.

44. La India modificó su posición respecto a la opinión expresada de que los intereses fundamentales de un país en desarrollo resultaban siempre afectados cuando se imponían medidas antidumping a importaciones de ese país. En consecuencia, observó que el efecto de la imposición de derechos antidumping sobre un producto por un país desarrollado Miembro consistía generalmente en cerrar la puerta a las exportaciones del país en desarrollo Miembro a un mercado de exportación importante. Aunque tal vez en algunos casos podría hacerse una distinción entre intereses "fundamentales", por oposición a intereses "no fundamentales" en relación con la imposición de derechos antidumping por un país Miembro desarrollado, en opinión de la India, en el caso de la mayoría de los países en desarrollo, sus intereses fundamentales se veían siempre afectados por la imposición de derechos antidumping sobre cualquier producto de exportación. En ese contexto, la India propuso que existiese la presunción de que la imposición de derechos antidumping sobre las importaciones afectaba a los intereses fundamentales de los países en desarrollo Miembros. Puesto que, en el caso de la mayoría de los países en desarrollo Miembros, siempre resultaban afectados intereses fundamentales cuando se imponían medidas antidumping sobre las importaciones de esos Miembros, en opinión de la India, una presunción irrefutable se justificaría plenamente, especialmente

dado que el resultado sería solamente imponer a los países Miembros desarrollados la obligación de explicar cómo y por qué no había ninguna posibilidad de soluciones constructivas.

45. En relación con la expresión “sin exigir la acumulación”, la India aclaró que, con respecto a los dos umbrales de volumen insignificante de importaciones previstos en el párrafo 8 del artículo 5 del Acuerdo, la propuesta de la India era que se elevase el umbral del 3 al 7 por ciento en el caso de los países en desarrollo Miembros y que el segundo umbral no se aplicase a ellos. Así pues, la India estaba proponiendo que, una vez que un país en desarrollo Miembro hubiera demostrado que le correspondía menos del 7 por ciento de las importaciones totales del Miembro importador, se pusiese fin a la investigación con respecto a ese país en desarrollo Miembro sin aplicar umbrales colectivos de ningún tipo. La India señaló que los umbrales especificados en el párrafo 8 del artículo 5 no tenían base científica y favorecían a los Miembros importadores que desearan proteger su industria nacional. Según la India, no era posible inferir automáticamente que el daño no era insignificante tan pronto como las importaciones superasen los umbrales especificados en el párrafo 8 del artículo 5. El fundamento en que se apoyaba la propuesta de la India de elevar los umbrales de volumen insignificante en el caso de los países en desarrollo Miembros era que debían aplicarse reglas especiales a los países en desarrollo.

46. Por último, la India explicó que consideraba recomendable que se enmendase formalmente el Acuerdo a fin de incorporar los nuevos umbrales *de minimis* para las importaciones de los países en desarrollo Miembros en el párrafo 8 del artículo 5. Otra posibilidad sería que, con arreglo al párrafo 2 del artículo IX del Acuerdo de Marrakech por el que se establece la Organización Mundial del Comercio, la propuesta de la India se aplicase a través de una interpretación vinculante del artículo 15 por la Conferencia Ministerial y el Consejo General. Entretanto, siguiendo el ejemplo de la Decisión de 5 de mayo de 1980 del Comité de la Ronda de Tokio, los países desarrollados Miembros podrían aplicar los nuevos umbrales *de minimis* sobre la base de un entendimiento acordado en el Comité.

47. El Canadá formuló preguntas relativas a la propuesta de la India en el documento G/ADP/AHG/W/130. En concreto, el Canadá preguntó, en relación con las pautas objetivas para determinar si los intereses fundamentales de los países en desarrollo Miembros resultaban afectados, qué pautas objetivas propondría la India que se utilizaran para hacer esta determinación, y qué país la haría. El Canadá se refirió también a la sugerencia de la India de que, en el contexto de la aplicación de un derecho inferior obligatorio, se calculase el “margen de daño” además del margen de dumping, y preguntó cómo propondría la India que se calculase el “margen de daño”.

48. En el documento G/ADP/AHG/W/135 y en respuesta a las preguntas del Canadá, la India reiteró los argumentos de su respuesta a las Comunidades Europeas, según los cuales, en el caso de la mayoría de los países en desarrollo Miembros, siempre se veían afectados intereses fundamentales cuando se imponían medidas antidumping sobre las importaciones de esos Miembros. En estas circunstancias, en opinión de la India, una presunción irrefutable estaría plenamente justificada. La India señaló también que su propuesta relativa al derecho inferior tenía un carácter limitado y buscaba obtener el compromiso de que las autoridades investigadoras calcularían también el margen de daño, además del margen de dumping, y aplicarían la regla del derecho inferior a las importaciones de los países en desarrollo. La cuestión de cómo debía calcularse el margen de daño era una cuestión más amplia que debería tratarse en el curso de las negociaciones en marcha.

49. Los Estados Unidos plantearon preguntas relativas a la propuesta de la India en el documento G/ADP/AHG/W/131. En concreto, los Estados Unidos preguntaron, en lo referente a la afirmación de la India de que “para examinar si la imposición de derechos antidumping afectaría a los intereses fundamentales de los países en desarrollo se necesita efectuar una investigación de carácter específicamente económico”, qué medidas y criterios de evaluación de la repercusión económica propondría utilizar la India a esos efectos. Los Estados Unidos pidieron asimismo, con respecto a la afirmación de la India de que “la cooperación de los exportadores de los países en desarrollo durante



una investigación antidumping genera costos financieros que difícilmente las empresas de que se trate podrán soportar", que la India explicase más detenidamente la opinión según la cual la posición financiera del exportador de que se tratase influía en si resultaban o no afectados los intereses fundamentales del país correspondiente. En relación con la propuesta sobre la norma *de minimis* más elevada, los Estados Unidos preguntaron en qué medida constituía la aplicación de una norma *de minimis* más elevada una alternativa a la imposición de derechos antidumping. Los Estados Unidos preguntaron también en qué medida requerirían las propuestas de la India una modificación del Acuerdo Antidumping.

50. En el documento G/ADP/AHG/W/131, y en respuesta a las preguntas de los Estados Unidos, la India reiteró los argumentos de su respuesta a las Comunidades Europeas, según los cuales, en el caso de la mayoría de los países en desarrollo Miembros, siempre se veían afectados intereses fundamentales cuando se imponían medidas antidumping sobre las importaciones de esos Miembros. Con respecto a la pregunta de los Estados Unidos sobre la relación de la posición financiera del exportador con el hecho de que los intereses fundamentales del país correspondiente resultasen o no afectados, la India manifestó que no afirmaba que la posición financiera del exportador que hacía frente a una investigación antidumping tuviese consecuencias directas para determinar si se veían afectados los intereses fundamentales del país en cuestión. En cuanto a la cuestión de si una norma *de minimis* más elevada podía considerarse "una alternativa a los derechos antidumping", la India señaló que no resultaba evidente por qué razón una solución constructiva debía ser siempre una alternativa a los derechos antidumping. En todo caso, la India insistió en que los umbrales especificados en el párrafo 8 del artículo 5 no tenían base científica y favorecían a los Miembros importadores que desearan proteger su industria nacional. En consecuencia, no era posible inferir automáticamente que el daño no era insignificante tan pronto como las importaciones superasen los umbrales especificados en el párrafo 8 del artículo 5. El fundamento en que se apoyaba la propuesta de la India de elevar los umbrales de volumen insignificante en el caso de los países en desarrollo Miembros era que debían aplicarse reglas especiales a los países en desarrollo. Según la India, tal solución podía justificarse ya fuese como una cuestión de consideración particular de la especial situación de los países en desarrollo Miembros con arreglo a la primera oración del artículo 15 del Acuerdo Antidumping, o como una solución constructiva con arreglo a la segunda oración de esa disposición. Por último, la India reiteró que consideraba recomendable que se enmendase formalmente el Acuerdo a fin de incorporar los nuevos umbrales *de minimis* para las importaciones de los países en desarrollo Miembros en el párrafo 8 del artículo 5, o a través de una interpretación vinculante de las disposiciones del artículo 15 por la Conferencia Ministerial y el Consejo General. Entretanto, siguiendo el ejemplo de la Decisión de 5 de mayo de 1980 del Comité de Prácticas Antidumping, los países desarrollados Miembros podrían aplicar los nuevos umbrales *de minimis* sobre la base de un entendimiento acordado en el Comité de Prácticas Antidumping de la Ronda de Tokio.

51. Los Estados Unidos pidieron a la India, en el documento G/ADP/AHG/W/137, que aclarase la referencia hecha en la anterior ronda de preguntas a la decisión del 5 de mayo de 1980. En concreto, los Estados Unidos preguntaron en qué se basaba la India para llegar a la conclusión de que la citada decisión constituía una modificación de una disposición del Código, y qué parte de esa decisión representaba, a juicio de la India, tal modificación.

52. La India respondió a la pregunta de los Estados Unidos en el documento G/ADP/AHG/W/139, subrayando que de lo que se trataba no era de si una decisión del Comité de la Ronda de Tokio podía modificar las disposiciones del Código de 1979 de la Ronda de Tokio, ni de si la Decisión de 1980 del Comité realmente modificaba, cambiaba o aumentaba las obligaciones dimanantes para las Partes Contratantes de las disposiciones del Código de 1979. De lo que se trataba realmente era de si el Comité, en su Decisión de 1980, había interpretado el texto de la primera oración del artículo 13 del Código de 1979 en el sentido de que abarcaba la etapa de un procedimiento antidumping previa a la iniciación y la investigación, que precedían a la etapa de aplicación de

derechos antidumping. La India explicó las razones por las que pensaba que el Comité de la Ronda de Tokio había interpretado la primera oración en ese sentido. En consecuencia, la India señaló que, con arreglo al artículo 15 del Acuerdo Antidumping, un país desarrollado Miembro debía tener particularmente en cuenta a los países en desarrollo Miembros durante toda la investigación antidumping.

53. En el documento G/ADP/AHG/W/136, Indonesia respondió a los comentarios formulados durante las reuniones informales. Con respecto a los comentarios de los Estados Unidos de que no era necesario modificar el artículo 15 para los países en desarrollo, Indonesia afirmó que apoyaba la Declaración de Doha por el énfasis otorgado a la aplicación del trato especial y diferenciado para esos países. En el caso del Acuerdo, Indonesia consideraba que el trato especial y diferenciado requería la definición de las soluciones constructivas previstas en el artículo 15 que deberían ser aplicadas. Si no se modificaba el artículo 15, Indonesia estimaba que se socavarían el espíritu, el propósito y la letra de la Declaración de Doha y que ello ensombrecería la nueva ronda, en las etapas iniciales del proceso de negociación. Además, Indonesia insistió en que los compromisos relativos a los precios o la aplicación del derecho inferior no constituirían un trato diferenciado para los países en desarrollo, dado que estaban al alcance de todos los Miembros. Por consiguiente, era necesario definir soluciones constructivas y hacerlas obligatorias en el Acuerdo.

54. En cuanto a la opinión, expresada por las Comunidades Europeas y otros Miembros, de que existían muchas dificultades prácticas en la aplicación de la propuesta de Indonesia relativa a la reducción de las importaciones tras el periodo de investigación, Indonesia señaló que no compartía la idea de que el lapso transcurrido entre el período de investigación inicial y la aplicación de medidas debiera constituir la base para la compilación de datos requerida en relación con los volúmenes de importación. Además, Indonesia recordó un procedimiento antidumping sobre el tereftalato de polietileno (PET) procedente, entre otros países, de Indonesia, en que se había excluido a un país exportador en la etapa de solicitud basándose en una participación en las importaciones inferior al 3 por ciento y en relación con las mercancías correspondientes a clasificaciones mixtas. En aquella ocasión, Indonesia había expresado su sorpresa por el hecho de que esos datos estuvieran disponibles con tanta premura. No obstante, eso mostraba que las Comunidades Europeas deberían poder aplicar la propuesta presentada por Indonesia. Por consiguiente, Indonesia no consideraba que los problemas prácticos mencionados estuviesen justificados.

55. En cuanto a la propuesta de Indonesia de que los derechos aplicados a países en desarrollo deberían extinguirse automáticamente después de un período de cinco años, algunos Miembros habían indicado que la propuesta no tomaba en cuenta la posibilidad de que ese período no facilitase la recuperación de la rama de producción nacional. Indonesia consideró la cuestión desde un punto de vista diferente. Un trato especial y diferenciado significativo y efectivo para los países en desarrollo sólo era posible mediante medidas (si se adoptaban) que en todo caso concederían menos protección a la rama de producción nacional del país importador. Indonesia pidió tanto a las Comunidades Europeas como a los Estados Unidos que confirmasen si su interpretación era correcta. A juicio de Indonesia, esa interpretación era fundamental para lograr un progreso significativo en la ronda. Además, Indonesia aceptaría ese resultado para los casos promovidos por Indonesia contra los países en desarrollo.

56. Los Estados Unidos presentaron, en el documento G/ADP/AHG/W/138, una propuesta para dar carácter operativo al artículo 15. A juicio de los Estados Unidos, una solución constructiva que debería considerarse en relación con el artículo 15 residía en los compromisos relativos a los precios. Al tiempo que se reconocía que esos compromisos debían ser aceptados por ambas partes, a los Miembros les resultaría sumamente beneficioso que se aclararan las modalidades a los efectos de la consideración de esta solución constructiva. Además, la determinación de los principios normativos a los efectos de tal consideración contribuiría en gran medida a dar carácter operativo al artículo 15, lo cual redundaría en provecho tanto de los países en desarrollo como de los países desarrollados. Por

consiguiente, los Estados Unidos propusieron que se respetasen determinados principios al explorar la posibilidad de hacer uso de esa solución constructiva en situaciones en las que el artículo 15 fuese aplicable. A ese respecto, los Estados Unidos propusieron lo siguiente: 1) los Miembros publicarían o darían a conocer de otro modo a todos los países en desarrollo exportadores objeto de investigaciones antidumping los procedimientos que habían de seguirse para solicitar el examen de un compromiso relativo a los precios, incluido el plazo dentro del cual se había de dar por concluido tal compromiso; 2) en las situaciones en que fuese aplicable el artículo 15, los países desarrollados Miembros darían a los países en desarrollo exportadores un plazo mínimo de dos semanas, contado a partir de la formulación de la determinación preliminar, para presentar una propuesta de compromiso relativo a los precios; 3) en las situaciones en que fuese aplicable el artículo 15, los países desarrollados Miembros darían a los países en desarrollo exportadores, previa solicitud y en la medida de lo posible, la oportunidad de reunirse con la autoridad investigadora y explicarle el sentido y la necesidad de toda propuesta de compromiso relativo a los precios, incluida la explicación de los intereses fundamentales del país en desarrollo que se verían afectados por la aplicación de derechos antidumping a falta de tal compromiso; 4) en las situaciones en que fuese aplicable el artículo 15, la autoridad investigadora del país desarrollado Miembro notificaría a todas las partes en la investigación el compromiso relativo a los precios aceptado preliminarmente y les haría llegar copia del mismo; 5) en las situaciones en que fuese aplicable el artículo 15, la autoridad investigadora del país desarrollado Miembro daría a todas las partes interesadas la oportunidad de comunicar por escrito argumentos y datos fácticos en relación con cualquier propuesta de compromiso relativo a los precios, y todas esas comunicaciones quedarían sujetas a las condiciones establecidas en el artículo 6; y 6) en las situaciones en que fuese aplicable el artículo 15, los países desarrollados Miembros no impondrían un compromiso relativo a los precios a no ser que, en lo esencial, todos los exportadores o productores del producto objeto de investigación aceptasen las condiciones de ese compromiso.

57. La propuesta de los Estados Unidos se puso a disposición de los Miembros como documento de sala para la reunión de septiembre de 2002. En esa reunión, varios Miembros expresaron su satisfacción por la iniciativa de los Estados Unidos, pero se plantearon, con carácter preliminar, varias preguntas relativas a aspectos concretos de las propuestas, incluidas la sugerencia de que los exportadores de países en desarrollo explicasen qué intereses fundamentales de esos países resultarían afectados, la concesión de una oportunidad para que todas las partes interesadas examinasen las propuestas de compromisos relativos a los precios e hiciesen comentarios sobre ellas, y la limitación de los compromisos relativos a los precios a no ser que, en lo esencial, todos los exportadores o productores los aceptasen. Varios Miembros expresaron su preocupación porque esas disposiciones concretas fuesen desfavorables para los países en desarrollo y, por consiguiente, contrarias al objetivo de los debates sobre la forma que hacer operativo el artículo 15.

58. Turquía formuló una propuesta en el documento G/ADP/AHG/W/141. En ella indicó que el artículo 15, al no exponer claramente las modalidades de una aplicación común y transparente del "trato especial" que deberían conceder los países desarrollados, había producido resultados muy limitados en favor de los países en desarrollo Miembros. Turquía apoyaba hasta cierto punto las propuestas presentadas por la India, según las cuales el trato especial y diferenciado en favor de los países en desarrollo Miembros podía consistir en una elevación del margen de dumping *de minimis* y del volumen *insignificante* de las importaciones. Sin embargo, Turquía señaló que, en los últimos años, se había observado un aumento notable del número de investigaciones antidumping iniciadas por los países en desarrollo, y expresó su creencia en que, incluso si todos los Miembros llegasen a un acuerdo sobre las propuestas de enmienda en favor de los países en desarrollo Miembros, la aplicación demostraría que el beneficio adicional para esos países en desarrollo Miembros seguiría siendo limitado a menos que las enmiendas obligaran a todos los Miembros, tanto "desarrollados" como "en desarrollo". En tales circunstancias, Turquía consideraba que el párrafo 8 del artículo 5 debería tener por objeto prestar especial atención a las exportaciones de los países en desarrollo Miembros sin hacer ninguna distinción en cuanto al país investigador. Si el país investigado era un país en desarrollo, se le debería conceder trato especial independientemente de que el país

investigador fuera un país desarrollado o un país en desarrollo. Para llegar a unos resultados más concretos y operativos, Turquía apoyaba las propuestas sobre la elevación de los márgenes *de minimis* y de los volúmenes considerados insignificantes, siempre que las enmiendas correspondientes obligasen a todos los Miembros, con independencia del nivel de desarrollo del país investigador. Para conseguir este resultado sería necesario introducir las enmiendas oportunas en el artículo 15 o directamente en el párrafo 8 del artículo 5.

59. A raíz de la propuesta de Turquía, varios países en desarrollo Miembros opinaron expresamente que las obligaciones del artículo 15 recaían en los países desarrollados Miembros con respecto a las investigaciones que llevasen a cabo en relación con exportaciones procedentes de países en desarrollo. En opinión de esos Miembros, el debate en curso se centraba en el trato especial y diferenciado para los países en desarrollo, y cualquier análisis del trato dispensado a los exportadores de países en desarrollo por otros países en desarrollo quedaba fuera del alcance de ese debate.

60. Durante la reunión del Grupo de Trabajo de octubre de 2002, el Brasil presentó, en su propio nombre y en el de la India e Indonesia, un documento de sala en que se combinaban las propuestas anteriormente formuladas por los tres países, habida cuenta de las preguntas planteadas, y se estructuraban esas propuestas. El Brasil observó que las propuestas no reflejadas en la comunicación conjunta se mantenían en la forma en que se habían distribuido inicialmente, y no se retiraban. En el documento conjunto se establecían propuestas respecto de los cuestionarios aplicables en las investigaciones antidumping, el nivel de los márgenes de dumping *de minimis* y los volúmenes insignificantes de importaciones, la aplicación de la norma del derecho inferior, los compromisos relativos a los precios, la observancia, y el período de aplicación de los derechos antidumping. Varios Miembros valoraron positivamente el documento conjunto por su utilidad y su exhaustiva exposición, pero algunas de las propuestas concretas formuladas suscitaron preocupación, por lo que determinados Miembros plantearon preguntas en relación con el documento, a las que el Brasil dio respuesta en la reunión.

61. Entre las preguntas y los motivos de preocupación se planteó, con respecto a los cuestionarios, si era adecuado tratar a todas las empresas de países en desarrollo del mismo modo, o si no sería más adecuado hacer distinción entre ellas en función del grado de complejidad de sus operaciones, incluidos sus sistemas de contabilidad, y de sus recursos. Con respecto a las propuestas sobre márgenes de dumping *de minimis* y volúmenes insignificantes de importaciones, varios Miembros indicaron que la introducción de cambios en los niveles establecidos en el Acuerdo constituiría una modificación del Acuerdo que, a su juicio, excedía del mandato y de la competencia del Grupo de Trabajo y del Comité. En cuanto a los compromisos relativos a los precios, se expresaron objeciones respecto de las propuestas sobre el establecimiento de plazos para ofrecer tales compromisos, la consideración "favorable" de ofertas de compromisos, la posibilidad de realizar observaciones respecto de tales ofertas, y la sugerencia de que los compromisos deberían reflejar un "precio inferior" en caso de que tal precio bastase para eliminar el daño, entre otros aspectos.

62. En la reunión celebrada por el Grupo de Trabajo en octubre de 2002, los Estados Unidos presentaron un proyecto de recomendación para dar carácter operativo al artículo 15. Sobre la base de su anterior propuesta, y habida cuenta de los debates celebrados en las reuniones de septiembre y octubre, los Estados Unidos propusieron que, en las situaciones a las que el artículo 15 fuese aplicable ("situaciones en que sea aplicable el artículo 15"), el Grupo de Trabajo recomendase que los Miembros respetasen los siguientes principios con respecto a los compromisos relativos a los precios: 1) los Miembros deberían publicar o dar a conocer de otro modo a todos los países en desarrollo exportadores objeto de investigaciones antidumping, ya fuese caso por caso o, preferiblemente, mediante disposiciones de aplicación general, los procedimientos que hubiesen de seguirse para solicitar el examen de un compromiso relativo a los precios, incluido el plazo dentro del cual se hubiese de dar por concluido tal compromiso; 2) en las situaciones en que fuese aplicable el artículo 15, los países desarrollados Miembros deberían dar a los países en desarrollo exportadores un

plazo no inferior a dos semanas, contado a partir de la formulación de la determinación preliminar, en el que pudiesen presentar una propuesta de compromiso relativo a los precios; 3) en las situaciones en que fuese aplicable el artículo 15, los países desarrollados Miembros deberían dar a los países en desarrollo exportadores, previa solicitud, la oportunidad de reunirse con la autoridad investigadora y explicar el sentido y la necesidad de toda propuesta de compromiso relativo a los precios, incluida la explicación de los intereses fundamentales del país en desarrollo que se verían afectados por la aplicación de derechos antidumping a falta de tal compromiso; 4) en las situaciones en que fuese aplicable el artículo 15, si la autoridad investigadora del país en desarrollo Miembro aceptase preliminarmente una propuesta de compromiso relativo a los precios, debería notificar a todas las partes en la investigación el compromiso relativo a los precios aceptado preliminarmente y hacerles llegar una copia no confidencial del mismo; y 5) en las situaciones en que fuese aplicable el artículo 15, si la autoridad investigadora del país desarrollado Miembro aceptase preliminarmente una propuesta de compromiso relativo a los precios debería dar a todas las partes interesadas la oportunidad de comunicar por escrito argumentos y datos fácticos en relación con la propuesta de compromiso relativo a los precios, y todas esas comunicaciones quedarían sujetas a las condiciones establecidas en el artículo 6.

63. Un Miembro formuló una objeción respecto a las referencias a países desarrollados y países en desarrollo tanto en la propuesta de los Estados Unidos como en el documento conjunto. Ese Miembro indicó que, a falta de una definición aceptada de país desarrollado y país en desarrollo, sería necesario especificar a quien correspondían los derechos y obligaciones objeto de debate, a fin de hacer más operativo el trato especial y diferenciado. Seguidamente, ese Miembro propuso que se adoptase un criterio relativo, referido al Miembro con nivel más avanzado de desarrollo o con nivel menos avanzado de desarrollo o, de no ser así, a países de ingresos elevados y países de ingresos medios o bajos.

64. Tras la reunión de octubre de 2002, ciertos Miembros que habían expresado sus opiniones durante la reunión emprendieron una serie de intensas consultas informales. Durante esas consultas, el Brasil presentó un proyecto de recomendación para dar carácter operativo al artículo 15 que contenía propuestas sobre cuestionarios, compromisos relativos a los precios y observancia del artículo 15. Los debates continuaron sobre la base de la propuesta brasileña y la propuesta estadounidense sobre compromisos relativos a los precios, y los Miembros reiteraron muchos de los argumentos expuestos anteriormente. Durante las consultas, el Canadá formuló una propuesta destinada a determinar la base común de las propuestas brasileña y estadounidense con respecto a la cuestión de los compromisos relativos a los precios. Tras nuevas consultas, el Presidente preparó un texto en que se establecía la base común de una recomendación para dar carácter operativo al artículo 15 (compromisos relativos a los precios), y otros elementos propuestos de una recomendación para dar carácter operativo al artículo 15 cuya base común seguía sin determinar (observancia y cuestionarios). Después de celebrarse nuevas consultas, el Presidente preparó un proyecto de recomendación para dar carácter operativo al artículo 15, con inclusión de texto entre corchetes en las materias en que los Miembros habían sido incapaces de llegar a un acuerdo en las consultas, que los Miembros examinaron cuando las reuniones informales del 27 de noviembre se reanudaron los días 9, y 11 y 12 de diciembre de 2002.

---